



LÍNEA PUEBLA-SAN MARTÍN-TLAXCALA
"EMBUJILLA DE ORO", S.A.
Toca número 536/61/2a. FORMA A. NUM. 35
Turnado al señor Ministro:
JOSE RIVERA PÉREZ CAMPOS.
Erio. Lic. Salvador Álvarez Rangel.

México, Distrito Federal, Acuerdo de la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de julio de mil novecientos sesenta y uno.

Cotejado.

V I S T O en revisión el presente juicio de amparo; y

R E S U L T A N D O :

PRIMERO:-Mediante escrito recibido el veintiocho de enero de mil novecientos sesenta Ignacio Espinoza Guerrero, Tomás Moctezuma Carro, Gloria Martha Hernández Romero, Esperanza Carro Newbery, Isaías Jurado Espinoza, Ignacio Hernández Arámbula, Miguel Moctezuma Rodríguez, Manuel Mendoza Lara, Dolores Romero Zepeda, Andrés Texuatl Pancuati, Telésforo Hernández Paredes, Manuel Hernández Galicia, Alicia Melgarejo Motolinía e Irma Domínguez López, por conducto de su apoderado Tomás Moctezuma Rodríguez, reclamando violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, promovieron juicio de amparo ante el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal contra actos del Jefe del Departamento de Tránsito Federal y Policía Federal de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, consistentes en el acuerdo contenido en oficio número 334, de fecha 19 de diciembre de 1959, recibido por dichos demandantes el día 14 de enero de 1960, y a virtud del cual proveído se releva a los mismos promoventes de la obligación que tenían de entrar al centro de la población de Cholula, Pue., con las unidades de su propiedad en las que vienen prestando servicio público de autotransportes, segunda clase, en la ruta que luego se indicará, y se

Vo. Bo.

les concede un plazo de 90 días para que construyan a la orilla del camino y fuera del derecho de vía, un cobertizo en calidad de paradero obligatorio; además, las consecuencias y efectos de tal acuerdo, consistentes en la desviación del servicio público de autotransportes referido que suministran tales demandantes, impidiéndoles que sus citadas unidades pasen por el centro de la susodicha población, como lo han hecho y lo están haciendo, la detención y secuestro de esos vehículos, y la aplicación de sanciones de toda clase a los promoventes motivadas en que no desvían su servicio en la forma de referencia.

SEGUNDO:- Se relata de parte de los quejosos en el expresado libelo inicial: que des e antes del año de 1947 vienen operando los repetidos promoventes de este juicio de garantías el servicio público de autotransportes, segunda clase, en la ruta "Puebla-Cholula-Zacatepec-Huejotzingo-San Martín-San Diego-Santa Justina-Panotla-Tlaxcala", bajo la forma de sociedad de hecho denominada "Línea Puebla-San Martín-Tlaxcala.--Estrella de Oro", S.A. de C. V. Que en octubre de 1947 el Subsecretario de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, dispuso que todos los servicios públicos de transporte efectuados en la ruta antedicha, deberían pasar por el centro de la población de Cholula, Pue., y en esa virtud los narrantes procedieron a observar esa orden. Que tal Secretaría comenzó a otorgar permisos de ruta a los productores, en los que se comprende la expresada población de Cholula, Pue. y el servicio público de transporte mencionado quedó definitivamente esta--



blecido por la propia Secretaría y en la repetida ruta. Que siendo ésta la situación surgió el acuerdo reclamado, provisto que entraña una revocación parcial de la ruta autorizada a los quejosos.

TERCERO:- Admitida la demanda se pidió el informe de ley, que rindió la autoridad señalada como responsable y en la audiencia de derecho por sentencia del 21 de noviembre de 1960, el C. Juez de Distrito concedió a los quejosos el amparo solicitado.

Para tal efecto se apoyó el sentenciador en lo siguiente: "El anterior concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo que se solicita. En efecto, al revisar su informe justificado la autoridad responsable anexó sendas copias certificadas del acto reclamado y del informe rendido por el Inspector Manuel Garay Ortega, dependiente de la Oficina de Inspección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el que se cita que se verificó la inspección por queja presentada por el Presidente de la Línea Puebla-Cholula y Anexas, S.A., de C.V. y que a dicho informe se adjuntaban los documentos que el mismo presentó para ser puestos a consideración de la Superioridad, que en este caso precisamente la autoridad señalada como responsable. Ahora bien, es incuestionable que tales expones constituyen una controversia planteada por la Sociedad Mercantil "Línea Puebla-Cholula y Anexas, S.A. de C.V., en contra de los quejosos como miembros de la Sociedad Mercantil "Puebla-San Martín Tlaxcala Estrella de Oro" S.A. de C.V.; la responsable ordenó investigaciones y dictó una resolución que afecta a estos últimos, pero sin haber sido oídos ni vencidos, pues no se les hizo saber la

existencia de la queja, ni sus razones y fundamentos, además de que la inspección se verificó a sus espaldas, de donde resulta que se les priva de un derecho que han ejercitado durante largos años como es el de entrar al centro de la ciudad de Cholula dejando y levantando pasaje en dicho lugar. Por otra parte, el resultado de la inspección aludida acredita ampliamente que los ciudadanos viajeros tienen preferencia por los vehículos propiedad de los quejosos y que ello se debe a un indiscutible mejor servicio. Respecto a la afirmación de la responsable acerca de que los quejosos carecen de permiso para entrar en la ciudad de Cholula debe estimarse inoperante porque la autoridad misma reconoce que les impuso la obligación de entrar a la ciudad y dar servicio de transporte, por lo que es de aplicarse la regla de derecho "en toda obligación existe un derecho correlativo" pues si se les impuso dicha obligación pudieron alegar desde ese momento el derecho a entrar en esa parte de su recorrido, por cuyo motivo quedó inserta en el itinerario, en la tarifa y en horario que exhibieron con su demanda de garantías, los cuales aparecieron autorizados por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas según oficio número 2514--1225 de fecha 19 de enero de 1950. En virtud de los anteriores razonamientos, debe concluirse que los actos reclamados privan de sus derechos a los quejosos como miembros de la sociedad mercantil "Línea Puebla-San Martín-Tlaxcala Estrella de Oro", S.A. de C.V., sin haber sido oídos ni vencidos en juicio, por lo que se violan las garantías de legalidad y de audiencia que concede el artículo 14 constitucional porque no fueron llamados a defensa y no se cumplieron los re-



quisitos esenciales del procedimiento,, debiendo concederse el amparo y protección de la justicia federal que se solicita."

El fallo en recurso también razona:

"La propia autoridad solicita el sobreseimiento en este juicio de garantías, alegando como causal que los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos de los quejosos porque el oficio se encuentra dirigido en forma específica a la sociedad mercantil "Línea Puebla-San Martín-Tlaxcala Estrella de Oro", S.A., de C.V. y que la demanda de garantías la promueven personas físicas. Esta causal es infundada, en virtud de que los quejosos anexaron a su demanda de garantías una constancia notarial de que son miembros de la citada Sociedad Anónima, a la que le ha reconocido personalidad la responsable, ya que ha sido puesta a su consideración la escritura constitutiva de la misma y ellos han aportado sus permisos de ruta respectivos, no habiendo recaído hasta la fecha ningún desconocimiento de tales calidades, ni negativa a su funcionamiento. Por tanto, debe entrar al estudio y resolución en el fondo de este amparo".

CUARTO:- Inconforme con el fallo la autoridad señalada como responsable, interpuso el recurso de revisión con fecha 7 de enero de 1961, que le admitió la Presidencia de esta Suprema Corte por acuerdo de fecha 10. de febrero del propio año; y el Agente del Ministerio Público Federal que interviene en el asunto, formuló pedimento en el sentido de que se rvoque la sentencia impugnada y se niegue a los quejosos la protección constitucional, ya que son fundados, arguye, los agravios aducidos por la res-

ponsable recurrente. La última actuación judicial efectuada en este juicio de garantías, es de fecha 24 de marzo de 1961.

C O N S I D E R A N D O Y

I.- Expresa la responsable y recurrente estos agravios: 1.- Que el fallo impugnado no estudia el sobrescimiento propuesto por la repetida autoridad inconforme, sino que identifica el interés de la sociedad que constituyen los quejosos, con las personas físicas de éstos, y a dicho respecto no da razón alguna que funde ese proceder. Que según el artículo 2o. de la Ley Federal de Sociedades Mercantiles, tanto las sociedades regulares como las irregulares (a estas últimas pertenece la que integran los quejosos) tienen una personalidad jurídica distinta de las personas físicas de sus socios. Que, en tal virtud, si la sociedad irregular constituida por los promoventes de este juicio de garantías estimaba que el acuerdo reclamado lo causaba a perjuicio, debió impugnarlo ella misma acudiendo al juicio de garantías; pero quienes lo han hecho han sido los socios, a quienes tal provido no les afecta sus respectivos intereses jurídicos y es claro, por esa razón, que este juicio de amparo es improcedente, a lo que no atende la sentencia rebatida. 2.- Que la sentencia que se revisa no toma en cuenta el informe justificado rendido en este negocio por la responsable recurrente, ni el acuerdo reclamado, pues de la lectura de ellos aparece evidente cómo no es verdad, contra lo que acepta dicho fallo, que se varíe la ruta otorgada a los demandantes del amparo, toda vez que no se les prohíbe en ese acuerdo tocar la ciudad de Cholula, sino que se les releva de la obligación



entrar con los vehículos en que prestan el servicio transporte, hasta el centro de la referida población, por los peligros que ello entraña para personas y vehículos, en vista de lo estrecho de las calles de la citada ciudad. Y, de otro lado, para que se hable de privación de algún derecho, es necesaria la demostración previa de la existencia del propio derecho y, en el caso, los quejosos no acreditaron que formara parte de su ruta el centro de la ciudad de Cholula. Que por no tomar en cuenta nada de lo anterior, la resolución en recurso aplica inexactamente en perjuicio de la responsable recurrente el artículo 14 constitucional y conculca en contra de la propia autoridad el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo. 3.- Que la sentencia rebatida asimismo viola en perjuicio de la repetida responsable recurrente los artículos 70 y 77 fracciones I y II de la citada Ley Orgánica, ya que al examinar el primer concepto de violación de los arts. aduce la concerniente demanda de garantías base de este negocio, alude el repetido fallo al mejor servicio prestado por la sociedad quejosa, punto del cual no se ocupa aquel concepto, que gira en torno a que la responsable no respetó a los quejosos la garantía de previa audiencia. Que, finalmente, el hecho de que algún dato conste en alguna tarifa, horario o itinerario, no genera derechos en favor de los concesionarios de alguna ruta, puesto que los repetidos documentos evidencian que son, por su naturaleza, modificables de parte de la autoridad concedente, misma que legalmente puede liberar a los concesionarios de obligaciones como la de tocar el centro de la ciudad de Cholula.

II.- Ahora bien: 1.- El primer agravio carece de fundamento, pues no es verdad que la sentencia in

pugnada haya omitido estudiar la causal de improcedencia que hizo valer la responsable y recurrente en su informe justificado. Al contrario, según puede verse consultando de la parte considerativa concerniente del fallo en recurso, éste sí se ocupa de tal causal, misma que, por cierto, la hace consistir el informe justificado en que el acuerdo reclamado está dirigido a la Sociedad Mercantil "Línea Puebla-San Martín-Tlaxcala Estrella de Oro", S. de C.V., y no a los quejosos, razón en fuerza de la cual dicho proveído, puntualiza el repetido informe justificado, podría causar perjuicios a la citada sociedad, pero no afecta, en cambio, los intereses jurídicos de los repetidos demandantes. Pues bien, al respecto la sentencia que se revisa terminantemente argumenta: "Esta causal es infundada, en virtud de que los quejosos anexaron a su demanda de garantías la constancia notarial de que son miembros de la citada sociedad anónima, a la que le ha reconocido personalidad la responsable, ya que ha sido puesta a su consideración la escritura constitutiva de la misma y ellos han aportado sus permisos de ruta respectivos, no habiendo recaído hasta la fecha ningún desconocimiento de tales calidades, ni negativa a su funcionamiento". Razones que no desvirtúa el agravio escurridizo, además de que, a fojas 58 de los autos principales, obró copia certificada del documento de fecha 26 de diciembre de 1955, expedida por el Oficial Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el cual documento, según reza tal copia, obra original en el expediente número 96 de Aprobación, que se tramita en la misma Secretaría tocante a la referida sociedad de hecho, y de tal documento aparece que los quejosos cabalmente son casi la totalidad de los integrantes de la propia sociedad, salvo que Eugenia B. de Casado, Carmen Po



Roldón y Rafael Galindo Pérez que figuran en tal documento, no figuran en la demanda y salvo también que Manuel Mendoza Lara y Esperanza Carro Newbery que sí figuran en la demanda, no aparecen en el documento, aunque la última figura, en cambio, en el oficio aprobatorio del proyecto de escritura constitutiva constante en copia certificada a a fojas 69 de los autos principales. En esa virtud, o sea, porque los demandantes son casi la totalidad de los miembros de la expresada sociedad, es claro que pudieron, efectivamente, con validez jurídica, promover por sí mismos este juicio de garantías, puesto que una "sociedad de hecho" carece a causa de su naturaleza misma, de órganos que puedan acreditarse como sus representantes, y puesto que si se rechazara al cuerpo social constituido solamente "de hecho" que actuó en ejercicio de los derechos sociales, ante la ausencia de una escritura constitutiva en que se instituyan los órganos del cuerpo, se excluiría a las "sociedades de hecho" de la esfera de lo jurídico, exclusión que sería contraria a lo que manda el artículo 2o. de la Ley de Sociedades Mercantiles, atributivo de personalidad jurídica a esa clase de sociedades.

2.- También es infundado el segundo agravio, toda vez, que, en contra de lo que afirma, el acuerdo reclamado no sólo releva a los quejosos de la obligación de entrar con los vehículos en que prestan el servicio de transporte de que se trata, hasta el centro de la ciudad de Cholula, sino que les prohíbe hacerlo al prevenirles: "se les otorga un plazo de 10 días para que construyan a orilla del camino y fuera del derecho de vía, un cobertizo que será paradero obligatorio". Y tocante a que los promoventes de este juicio constitucional no demostraron que formara parte de su ruta el centro de la Ciudad de Cholula, el agravio en análisis

no desvirtúa el argumento que sobre ese punto desarrolla el fallo recurrido al razonar que la responsable misma reconoce que les impuso a los quejosos la obligación de entrar a dicha ciudad y dar servicio de transporte, en cuya virtud es de aplicarse a tal situación la regla de derecho que dice: "en toda obligación existe un derecho correlativo"; pues si se les impuso la referida obligación, pudieron alegar desde ese momento el derecho de entrar en esa parte de su recorrido, misma que por tal motivo quedó inserta en el itinerario, tarifa y horario exhibidos con la demanda de garantías, y que aparecen autorizados por la Secretaría de Comunicaciones.- 3.- El tercer agravio carece igualmente de fundamento, pues aun siendo verdad que el primer concepto de violación de los que expresa la demanda de garantías base de este asunto, no incluye el que asumió la sentencia recurrida al sostener que la inspección practicada a las actividades de transporte que desarrollan los quejosos, evidencia que su servicio es el preferido por los viajeros; lo cierto es que en tal preferencia de los viajeros no es en lo que descansa la sentencia impugnada para estimar procedente dicho primer concepto de violación, sino en que la citada inspección a los servicios se practicó a virtud de queja de la empresa tercera perjudicada, sin que en relación con esa queja y ni siquiera en la diligencia de inspección se haya oído a los agraviados en defensa de sus intereses, omisiones con las cuales se les conculcó la garantía de audiencia, que es a lo que sí se refiere el propio concepto de violación, como lo reconoce la responsable en su agravio invocado. Atenta la ineficacia de los agravios aducidos, debe confirmarse la sentencia recurrida.

Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos, 83, 84, 86, 88 párrafo primero y demás relativos de la



de Amparo, es de resolverse y se resuelve:

I.- Se confirma la sentencia que se revisa.

II.- La Justicia de la Unión ampara y protege

a Ignacio Espinosa Guerrero y demás personas que puntualiza el resultando primero de esta ejecutoria, contra los actos que reclaman al Jefe del Departamento de Tránsito Federal y Policía Federal de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, consistentes en el acuerdo contenido en oficio número 334, de fecha 19 de diciembre de 1959 y a virtud del cual proveído se releva a los mismos promoventes de la obligación que tenían de entrar al centro de la población de Cholula, Pue., con las unidades de su propiedad en las que vienen prestando servicio público de autotransportes, segunda clase, en la ruta de que se trata y se les concede un plazo de 90 días para que construyan a la orilla del camino y fuera del derecho de vía, un cobertizo en calidad de paradero obligatorio; además, las consecuencias y efectos de tal acuerdo, consistentes en la desviación del servicio referido, impidiéndoles a los demandantes que sus citadas unidades pasen por el centro de la mencionada población, como lo han hecho y lo están haciendo, la detención y secuestro de esos vehículos, y la aplicación de sanciones de toda clase a los promoventes, motivadas por que no desvían tal servicio en la forma de referencia.

§ III.- Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el Toca.

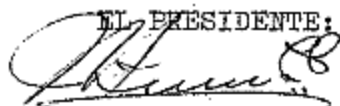
SAR/evl.

Así por unanimidad de cinco votos, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ponente el señor Ministro José Rivera P.C. Firman el Presidente de la Sala y Ministros que intervienen

###

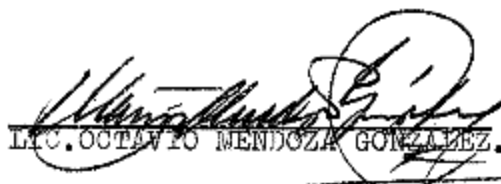
en el asunto, con el Secretario que autoriza.

EL PRESIDENTE:



LIC. JOSE RIVERA P.C.

LOS MINISTROS:



LIC. OCTAVIO MENDOZA GONZALEZ.



LIC. RAFAEL MATOS ESCOBEDO.



LIC. FELIPE TENA RAMIREZ.



LIC. FRANCO CARRENO.

EL SECRETARIO:



LIC. MANUEL RODRIGUEZ SOTO.

25 OCT 1961

"En _____ por lista de la misma
fecha, se notificó la resolución anterior a los intere-
sados y al Ministerio Público Federal,

